

David Nieves Bullejos

*Investigador, Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM),
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Miembro del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe
y Musulmán (OPEMAM)*

Desde el año 2012, Malí sufre una crisis multiforme que ha generado inestabilidad en el país y cuyos efectos han traspasado sus fronteras. Sus vulnerabilidades se han agudizado en los últimos seis años, contribuyendo a acrecentar ciertas dinámicas como la migración o la proliferación de grupos armados en la zona del Sahel. El antes estable y aplicado socio de las organizaciones internacionales que era Malí, se derrumbó súbitamente durante el primer trimestre de 2012, perdiendo a gran velocidad la mitad del territorio nacional en favor de grupos autodenominados yihadistas y evidenciándose una crisis política con el golpe de Estado¹. La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un Estado maliense que es dependiente económicamente del exterior y cuya ineficiencia ha lastrado su capacidad de contener y resolver las dinámicas anteriormente señaladas, que afectan a la subregión y al vecindario ampliado.

Llegados a finales de los años noventa, los grupos terroristas prosperaron gracias a la laxitud política del Estado y a su escasa presencia en amplias zonas rurales del norte del país, de una extensión del tamaño de la península ibérica. La deficitaria gestión de las anteriores rebeliones tuareg fue el caldo de cultivo para un amplio enfrentamiento armado, en enero de 2012, entre el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) y el Estado², que permitió la entrada en escena de los grupos yihadistas (Nievas, 2014). Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África del Oeste (MUYAO) se habían enriquecido durante años por el cobro de rescates de los secuestros a ciudadanos europeos en el Sahel y habían encontrado acomodo entre comunidades locales del norte de Malí.

Estos grupos inicialmente se unieron al MNLA en el combate contra las fuerzas malienses, pero más tarde acabaron usurpando el control a los rebeldes tuaregs. Para ello, los grupos yihadistas se valieron de un potente poderío armado, pero, sobre todo, hicieron hincapié en un discurso integrador que, en un primer momento, fue bien acogido en el convulso mosaico de frágiles equilibrios étnicos de la zona norte del país. Basándose en un orden apegado al islam, se ganaron la confianza de parte de las poblaciones y, a mediados de 2012, tomaron el control de las ciudades y los territorios. Una ocupación que se mantuvo sin grandes

El antes estable y aplicado socio de las organizaciones internacionales que era Malí se derrumbó súbitamente en 2012, perdiendo la mitad del territorio nacional en favor de grupos autodenominados yihadistas y evidenciándose una crisis política con el golpe de Estado

1. No es nuestra pretensión abundar en el debate (Gómez García, 2019; Wiktorowicz, 2006) sobre la naturaleza religiosa o no de estos grupos armados que utilizan métodos terroristas y están afiliados a organizaciones reconocidas internacionalmente como terroristas, p. ej.: Al Qaeda o Dáesh. Hemos preferido señalar que son estas organizaciones las que se consideran yihadistas.
2. Tres levantamientos armados de milicias tuaregs tuvieron lugar en Malí en décadas anteriores. Desde Bamako se abordaron desde la represión militar y el incumplimiento político y económico de los sucesivos acuerdos de paz.

La fuerte intervención militar y policial no solo no se ha traducido en una disminución de la inseguridad, sino que ésta ha aumentado, así como los flujos migratorios que continúan llegando a la frontera sur de la Unión Europea

3. Alemania mantiene en Malí su mayor contingente militar fuera de sus fronteras en el marco de la misión de Naciones Unidas, MINUSMA. Canadá también ha desplegado la misión Presence para contribuir a los esfuerzos de la MINUSMA. China participa en Malí en lo que es su segunda misión con tropas de combate en el marco de las operaciones de paz. Italia ha desplegado personal militar en el vecino Níger.
4. Amadou Koufa, uno de los principales líderes insurgentes de la zona, fue dado por muerto por las autoridades francesas tras un bombardeo a finales de noviembre de 2018. Sin embargo, fuentes de la organización ligada a Al Qaeda desmintieron su muerte en varias ocasiones. Desde el inicio de las operaciones antiterroristas en 2013, las fuerzas francesas han anunciado en repetidas ocasiones la eliminación de líderes importantes de la insurgencia saheliana, pero estos hechos se traducen débilmente en una reducción de la violencia en el norte y centro de Malí.
5. Según estimaciones de los autores Craven-Mathews y Englebert (2018), la ayuda internacional en los ámbitos de desarrollo y seguridad rondan los 3.000 millones de dólares desde el año 2013, siendo el casi el 50% destinado a la misión de Naciones Unidas y la operación francesa Barkhane.

sobresaltos hasta enero de 2013. Sin embargo, la amenaza que suponía su control territorial y la posibilidad de una ampliación de sus dominios hacia el sur del país, donde se encuentra la mayor parte de la población maliense, motivó la intervención militar francesa Serval en enero de 2013 tras la petición oficial del Gobierno de Bamako.

La intervención militar francesa y las diferentes misiones internacionales que desde entonces se mantienen en Malí y en la subregión (MINUSMA, EUTM Malí, EUCAP Sahel, EUCAP Níger y recientemente la fuerza conjunta del G5 Sahel) demuestran la preocupación internacional por la estabilización del país y la preservación de los intereses europeos en la zona. El terrorismo internacional y el control de los flujos migratorios hacia el norte de África y Europa son las dos principales inquietudes que motivaron la intervención de un número cada vez mayor de estados europeos y no europeos en Malí³.

Sin embargo, esta fuerte intervención militar y policial no solo no se ha traducido en una disminución de la inseguridad, sino que ha aumentado, así como los flujos migratorios que continúan llegando a la frontera sur de la Unión Europea a pesar de los esfuerzos europeos en externalizar la frontera en la zona del Sahel.

El número de ataques a las fuerzas de seguridad malienses y a los efectivos de las diferentes misiones a manos de los grupos autodenominados yihadistas ha aumentado dramáticamente desde 2015 (Weiss, 2017). Los grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda se han reorganizado bajo una única marca (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes - Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM, en árabe) mientras que otro grupo de la región se ha sumado a la organización del Daesh (Estado Islámico del Gran Sáhara), llevando la inseguridad a las capitales de los países del África Occidental y, de una forma cada vez más intensa, al norte y este de Burkina Faso. En los últimos dos años estos grupos se han expandido en las zonas rurales de Malí y Burkina Faso, donde han logrado imponer su autoridad en ciertos territorios del mundo rural, cerrando escuelas y expulsando a los agentes del Estado.

La actividad yihadista en Malí se ha desplazado preocupantemente a las regiones del centro, donde gran parte de los ataques tienen lugar actualmente. La violencia en esta zona se ha deslizado de forma grave a las relaciones intercomunitarias, especialmente entre comunidades de pastores y agricultores, donde los grupos yihadistas han encontrado un terreno de tensión, fértil para sus propósitos de crecimiento (Tobie, 2017). En la zona opera la brigada del predicador fulani Amadou Koufa, adscrito a la organización JNIM, el cual se sospecha que está detrás del aumento de la violencia en los últimos dos años. Koufa⁴ protagonizó el último vídeo de propaganda de la organización vinculada a Al Qaeda, en el que llama a los fulani de toda la región saheliana a sumarse al «combate de los infieles».

I. La pervivencia de las causas de la inestabilidad

Tras la crisis de 2012, la comunidad internacional se ha volcado en la asistencia económica y militar a Malí⁵. El derrumbe del Estado tras la rebelión y la toma del control por los grupos yihadistas se ha intentado revertir con la ayuda multilateral y bilateral de sus socios y la intervención de varias misiones internacionales en el país. Pero los resultados

obtenidos hasta ahora no apuntan a una mejora en las cuestiones clave que favorecen la persistente debilidad y la crisis multiforme que afecta al país. La deficiente gestión del actual presidente Keita, la falta de crítica internacional a la escasez de avances y un exceso de concentración de los medios internacionales y nacionales en los problemas de seguridad que afectan a los socios europeos y occidentales ponen en entredicho la rehabilitación del Estado y la seguridad de sus poblaciones.

La asistencia internacional se centró, en un primer momento, en el apoyo a la búsqueda de la legitimidad constitucional y la normalización política en Malí después del golpe de Estado de marzo de 2012. Las elecciones presidenciales de 2013, celebradas con el apoyo de la comunidad internacional apenas siete meses después de la reconquista del norte, dieron como ganador a Ibrahima Boubacar Keita. Su presentación como el hombre del momento, apoyándose en su condición de persona fuerte y con experiencia –fue primer ministro y presidente de la Asamblea nacional–, despertó la ilusión de una parte importante del electorado que vio en él la persona para llevar a cabo la salida de la crisis (Nievas, 2013). Fue significativo el aumento del nivel de participación electoral a cerca del 50% y que el principal rival político en las elecciones, Cissé, acudiera a casa de Keita para felicitarle el día de la jornada electoral, reconociendo públicamente su victoria, y anticipando quizá la hegemonía del presidente y su partido.

El presidente Keita prometió la paz y el restablecimiento del Estado en todo el territorio, la rehabilitación de un ejército fuerte y capaz de enfrentarse a los desafíos de seguridad, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Tras largas negociaciones bajo el auspicio de la comunidad internacional, la coordinadora de grupos rebeldes y el Gobierno de Keita llegaron a firmar los acuerdos de paz de 2015, que se basaban en unas buenas intenciones de desarrollo del norte, de reforma institucional a través de la descentralización y la apuesta por la reconciliación entre las partes, ahondando, *a priori*, en las causas profundas de las cíclicas rebeliones como la discriminación política y cultural y la falta de desarrollo en el norte.

Sin embargo, las promesas y las ilusiones puestas en Keita se desvanecieron rápidamente. La lentitud en una descentralización real de la administración o la falta de resultados palpables por las poblaciones en el desarrollo del norte y la seguridad de las poblaciones no parecen indicar que se haya progresado en hacer efectivas aquellas promesas presidenciales ni en la aplicación del acuerdo de paz, manteniendo así vigente parte de las causas de la inestabilidad en este país e interrogando si se está más cerca de una solución (o soluciones) o, en cambio, se sigue alejando de ella.

El ejército es un pilar importante sobre el que se asientan las estrategias para aliviar la crisis de seguridad y autoridad en el territorio. En el año 2012 su debilidad se puso de manifiesto cuando fue superado con relativa rapidez por las milicias del MNLA en el norte del país. Desde 2013 el ejército está apoyado por las misiones europeas de la EUTM Malí y la EUCAP Sahel que contribuyen a su reconstrucción y adiestramiento, pero aun ahora no está en condiciones de ejercer su papel de garante de la seguridad necesaria por sí solo y, debido a los casos conocidos de abusos sobre poblaciones locales en la supuesta lucha contra el terrorismo, tampoco parece preparado para la tarea de protección de sus poblaciones (HRW, 2017). Hasta el momento, el esfuerzo antiterrorista ha dejado de

La deficiente gestión del presidente, la falta de crítica internacional a la escasez de avances y un exceso de concentración de los medios internacionales y nacionales en los problemas de seguridad que afectan a los socios europeos y occidentales ponen en entredicho la rehabilitación del Estado y la seguridad de sus poblaciones

Los acuerdos de paz de 2015 no han conseguido pacificar las zonas del norte. Su implantación es muy lenta por la atomización de los grupos rebeldes, la desconfianza entre ellos y la falta de voluntad política de Bamako en su implementación efectiva

lado la posibilidad de la implementación de una estrategia local enfocada en el bienestar y la seguridad de las poblaciones.

Los acuerdos de paz de 2015 no han conseguido pacificar las zonas del norte. Su implantación es muy lenta por la atomización de los grupos rebeldes, la desconfianza entre ellos y la falta de voluntad política de Bamako en su implementación efectiva. La forma de afrontar el conflicto del norte por parte del Gobierno, apoyándose en milicias étnicas de las regiones, no parece la mejor forma de abordar un problema político que transita de nuevo por los errores del pasado que generaron el estallido de rebeliones (Lacher, 2012).

La voluntad de lucha contra la corrupción también ha brillado por su ausencia. Durante el mandato de Keita se han conocido graves casos de corrupción, algunos sacados a la luz por el auditor general del Estado, mientras que los rumores de clientelismo y corrupción que acechan a la familia presidencial se han intensificado desde su ascenso al poder. La corrupción rampante, relativa a la cúpula presidencial y su familia, el nepotismo en la figura de su hijo, Karim Keita –diputado y presidente de la comisión de defensa–, una política nacional errática –hasta cinco primeros ministros en cinco años– y una predilección por los viajes al exterior –hasta 154 viajes internacionales en cinco años de mandato– han lastrado la confianza de la población en las instituciones y el presidente.

El refuerzo institucional tampoco ha sido percibido por la población. La confianza en las instituciones por parte de los malienses sigue muy baja. Estudios recientes en la región central de Mopti indican que la interacción de los individuos consultados con el Estado se limita únicamente al pago de tasas (Bleck y Michelich, 2015). Cinco años después de las promesas de rehabilitación del Estado, los malienses siguen padeciendo falta de servicios básicos, mala calidad en la educación y un creciente nivel de inseguridad.

Las elecciones presidenciales de 2018 dieron como ganador a Keita entre graves acusaciones de fraude de la oposición y una alarmante baja participación (34%). Este resultado no augura un cambio drástico de la situación en cuanto a la gobernanza y el abordaje de las causas de la crisis que persisten en la inestabilidad del país. A esto se suman los efectos que pueden generar las dudas sobre la limpieza electoral de la victoria de Keita. Las sospechas sobre el fraude electoral son alimentadas por la oposición –fraude sin confirmar por los observadores internacionales–, y el malestar creciente por el control de las redes sociales o las trabas a la prensa, podrían conectar con las demandas sociales que parte de la población reclama, y con ello reactivar la efervescencia social que se vivió en las calles en 2017 con motivo del intento de reforma constitucional que ampliaba los poderes del jefe del Estado. La preocupante falta de crítica mostrada por la comunidad internacional en los últimos años sobre estos aspectos incide aún más en el aumento de señales de malestar popular respecto a las intervenciones internacionales en el país.

A pesar de la desilusión que se percibe por el incumplimiento de las promesas, la victoria de Keita en 2018 podría significar cierto aval a su gestión. No obstante, su renovación en la jefatura del Estado también tiene mucho que ver con la crisis de la clase política y la escasa confianza que las poblaciones depositan en ella. Una alternativa política tampoco se aprecia entre las fuerzas de la oposición. El principal rival, Cissé,

era percibido como un representante más de la antigua clase política y no ofrecía un cambio de rumbo real. También tiene que ver con la falta de regeneración de la clase política, cuya mayor parte proviene de los inicios de la democracia en los años noventa. La victoria del presidente saliente es fruto de la concentración de los esfuerzos –a través del fraude electoral según la oposición– para la recuperación de la legitimidad únicamente en el aspecto electoral, lo que no despeja las sombras sobre el cumplimiento de sus promesas y la calidad democrática de su Gobierno.

II. El fracaso de la securitización

Si nos atenemos a los resultados, casi seis años después, las agendas internacionales para Malí no han podido ni estabilizar ni pacificar las amplias regiones convulsas del norte y centro del país. La violencia y la inseguridad en Malí ya es un problema con riesgo de enquistarse.

En cuanto al aumento de la violencia yihadista, la falta de presencia del Estado en amplios lugares del país –especialmente en las zonas rurales– y su aparición como fuerza depredadora, o abusiva allí donde está presente, favorece sin duda la progresión de los grupos autodenominados yihadistas. Esta situación les ha permitido instalarse cómodamente y progresar en sus actividades y en el reclutamiento, a pesar de la fuerte intervención militar y policial internacional. Los abusos realizados por las fuerzas de seguridad o por las fuerzas armadas aliadas a Bamako, muchos de ellos documentados⁶, son instrumentalizados por los líderes yihadistas para demostrar la incapacidad del Estado para proteger a sus poblaciones, lo que facilita la labor de reclutamiento.

Últimamente, la presencia de estos grupos en el centro del país se ha apoyado en los enfrentamientos entre comunidades, avivados por conflictos respecto a las tierras y su uso (Kleinfeld, 2018), y por el sentimiento de injusticia y desprotección de los pastores fulani frente al Estado o frente a grupos supuestamente favorecidos por Bamako y las misiones internacionales. Los grupos yihadistas proponen a las poblaciones agraviadas un orden alternativo basado en la justicia islámica ante la escasa presencia y la corrupción del Estado en esas zonas. Ciertos grupos comunitarios subalternos ven la posibilidad de revertir las jerarquías patrocinadas por el Estado en las que ciertas élites comunitarias han sido favorecidas en detrimento de otras. El caso de los fulani es uno de ellos. Los fulani han sufrido el acoso y la discriminación por parte del Estado y otros grupos. Las organizaciones yihadistas resultan atractivas para estas comunidades al dispensar protección y una novedosa justicia basada en una interpretación de la sharía o ley islámica, frente a la percepción de una justicia tradicional deslegitimada y una estatal lenta y corrupta.

Las agendas de securitización han hecho hincapié en que la ideología islámica es un factor necesario para la radicalización de los individuos y que, por tanto, es obligado poner la lupa sobre los discursos e individuos religiosos. Sin embargo, los estudios recientes sobre la integración en estos grupos en el norte y centro de Malí despejan cualquier duda sobre el componente religioso. Los resultados obtenidos por los estudios de Sangaré (2016) y Thérroux-Benoni *et al.* (2016) con jóvenes detenidos por integración en MUYAO y Ansar Din demuestran que los factores que empujan a estos jóvenes a enrolarse tienen que ver con la protección, la justicia y la

La preocupante falta de crítica mostrada por la comunidad internacional en los últimos años sobre estos aspectos incide aún más en el aumento de señales de malestar popular respecto a las intervenciones internacionales en el país

6. Un dramático ejemplo es la masacre de más de 150 personas en un poblado predominantemente fulani en Ogossagou, provincia de Bankass. A falta de una investigación rigurosa, la responsabilidad de la matanza de civiles ha sido dirigida por el Gobierno de Malí a la asociación Dan Na Ambassagou, milicia de autodefensa dogón que se puso en marcha en 2016 para defender poblados mayoritariamente dogón de los ataques relacionados con las organizaciones yihadistas en la zona del centro de Malí. Organizaciones civiles fulani como Tabital Pulaaku y analistas locales atribuyen al Gobierno maliense un apoyo tácito hasta la fecha a dicha asociación e incluso su armamento con armas automáticas con motivo de la «lucha contra el terrorismo».

Los factores políticos y sociales son clave para entender el paso a la acción violenta y los procesos de integración de jóvenes malienses en los grupos autodenominados yihadistas

provisión de servicios básicos frente a otros grupos como el MNLA o la acción predatora del propio Estado maliense (Sangaré, 2016). No es desproporcionado pensar que, ante el creciente clima de ataques y represalias, y la incapacidad del Estado para frenar dicha violencia y acabar con la impunidad de los responsables, los grupos yihadistas tengan todavía más fácil instrumentalizar la violencia en su beneficio. Los factores políticos y sociales son clave para entender el paso a la acción violenta y los procesos de integración de jóvenes malienses en los grupos autodenominados yihadistas.

Por otro lado, al igual que la mayoría de estados subsaharianos con un pasado colonial, el Estado maliense nunca se ha caracterizado por ser un Estado fuerte. El control de los más de 7.000 km de fronteras nunca ha sido efectivo, y es probable que nunca lo sea por la dificultad intrínseca para ello y por las vulnerabilidades económicas y climáticas que alberga el país. Pero hay forma de atajar algunas de las causas que generan la inseguridad e inestabilidad con el fortalecimiento del Estado maliense, y por consiguiente, de su legitimidad ante sus poblaciones. Ese fortalecimiento no puede ser únicamente enfocado al refuerzo de los aparatos de seguridad.

Al igual que ha pasado en otras latitudes de la región, la atención desproporcionada a potenciar los aparatos de seguridad, sin la mejora de otros sectores civiles, o la traducción del crecimiento económico en las capas sociales, con el consecuente aumento del malestar, de los sentimientos de discriminación y de la efervescencia social, puede constituir un elemento de represión en un momento en el que se observan algunos gestos preocupantes, aunque por ahora tímidos, de censura y de control político y social por la presidencia maliense. Es importante tomar en cuenta cuánto la rehabilitación del Estado maliense tiene que ver principalmente con el refuerzo de su presencia bajo una forma inclusiva y la extensión de los servicios básicos y la seguridad en sentido amplio a los ciudadanos, entre ellos la justicia y la protección alimentaria y climática.

El restablecimiento de la normalidad democrática en 2013 y la celebración de las elecciones presidenciales de 2018 son una buena noticia para la estabilización de Malí. Sin embargo, la búsqueda de la legitimidad en las urnas puede descuidar la legitimidad adquirida por otras vías más duraderas como el buen gobierno, la presencia efectiva del Estado en todo el territorio y en aspectos centrales de las preocupaciones de la población, como los servicios básicos, la lucha contra la corrupción a todos los niveles y la reconciliación basada en la inclusión de las sensibilidades religiosas, étnicas y regionales. Estos elementos hacen correr el riesgo de caer –si no se ha caído ya de nuevo– en el mantenimiento de una democracia de fachada electoral que desatiende las principales necesidades de las poblaciones, como ha ocurrido en las décadas anteriores con el resultado del estallido de la crisis multiforme en 2012.

IV. ¿Hacia dónde camina Malí?

La emergencia de la violencia yihadista en el centro del país pone en evidencia la existencia de deficiencias estatales en el abordaje de las necesidades de las poblaciones y en las relaciones de poder locales, muchas veces entre comunidades, con motivaciones más terrenales que las soflamas islámicas que los líderes yihadistas lanzan en sus comunicados. Los grupos armados han sabido capitalizar los amplios márgenes que el

Estado les deja por su debilidad estructural y las deficiencias gubernamentales, permitiéndoles reclutar y haciendo atrayente su discurso.

Si ponemos la atención sobre el discurso yihadista presente en la zona podremos ver que, si bien el islam le pone lenguaje a la violencia armada que promueven estos grupos, en lo que inciden va más allá de la religión. En concreto, desafían al Estado, cuestionando su legitimidad y oponiéndose a él en sus diferentes vertientes, como sus alianzas con actores internacionales implicados en la «lucha contra el terrorismo» o el rechazo de su presencia, tildada de corrupta y predatora e incluso sospechosa de tomar partido a favor de ciertas milicias de dudosa trayectoria en pos de dicha lucha. Es de utilidad indagar más allá de la superficie del discurso radicalizado para vislumbrar las causas subyacentes producidas por las dinámicas locales y hacer hincapié en la percepción de seguridad que tienen las propias poblaciones.

Una mejor presencia del Estado en el territorio, especialmente en las zonas rurales, y la recuperación de la legitimidad a partir de una acción inclusiva y protectora de las poblaciones sería una buena noticia encaminada a resolver parte de la crisis de seguridad que vive el país. Por su parte, el acercamiento de los socios internacionales a la realidad maliense debería de aportar un punto de vista más crítico respecto a la legitimidad y la forma de gobernanza del Estado en los aspectos sociales y de justicia, de reconciliación entre distintas comunidades y de lucha contra la corrupción (Thurston, 2018). La urgencia percibida por los socios internacionales para la contención de los fenómenos que afectan a la estabilidad de la región, el terrorismo y la migración, no debería de ser excusa para el descuido de la observación y la crítica de las malas prácticas en la profundización de un Estado que recupere legitimidad especialmente en zonas rurales y entre la juventud.

El Estado maliense es desafiado en numerosos aspectos a lo largo de su territorio y, en ocasiones, es percibido como ajeno a las poblaciones. Los actores no estatales como los grupos autodenominados yihadistas o los grupos armados adquieren la legitimidad que el Estado ha sido incapaz de mantener. Abordar estos aspectos que, en definitiva, significa reforzar las instituciones del Estado y extender los beneficios y mejoras a la población de una forma más estrecha, relegando las agendas antiterroristas a un plano posterior a las inquietudes de seguridad de las poblaciones, es contrarrestar los factores que generan inestabilidad tanto en Malí como en la región del Sahel.

Referencias bibliográficas

Bleck, Jaimie y Michelich, Kristin. «The 2012 crisis in Mali: ongoing empirical state failure». *African Affairs*, n.º 114 (2015), p. 1-26.

Craven-Matthews, Catriona y Englebert, Pierre. «A Potemkin state in the Sahel? The empirical and the fictional in Malian state reconstruction». *African Security* (2017).

Gómez García, Luz. *Diccionario de islam e islamismos*. Madrid: Trotta, 2019.

Human Rights Watch. «Mali: Unchecked Abuses in Military Operations. Mali, Burkina Faso Troops Commit Killings, "Disappearances," Torture».

Una mejor presencia del Estado en el territorio, especialmente en las zonas rurales, y la recuperación de la legitimidad a partir de una acción inclusiva y protectora de las poblaciones sería una buena noticia encaminada a resolver parte de la crisis de seguridad que vive el país

HRW (2017) (en línea) [Fecha de consulta 02.03.2019] <https://www.hrw.org/news/2017/09/08/mali-unchecked-abuses-military-operations>

Kleinfeld, Philip. «“I have lost everything”: In central Mali, rising extremism stirs inter-communal conflict». *The New humanitarian* (2018) (en línea) [Fecha de consulta 01.03.2019] <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2018/09/04/mali-fulani-dogon-extremism-stirs-intercommunal>

Lacher, Wolfram. «Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region». *Carnegie Endowment for International Peace* (2012) (en línea) [Fecha de consulta 14.02.2019] <https://carnegieendowment.org/2012/09/13/organized-crime-and-conflict-in-sahel-sahara-region-pub-49360>

Nievas Bullejos, David. «Elecciones presidenciales 28 de julio y 11 de agosto de 2013». *Informe OPEMAM* (2013) (en línea) [Fecha de consulta 12.03.2019] <http://www.opemam.org/node/1703>

Nievas Bullejos, David. «Rebelión y sharia en el Sahel: una aproximación al estallido de la rebellion tuareg y a la ocupación del norte de Malí por grupos yihadistas e islamistas armados». *UNISCI Discussions Papers*, n.º 34 (2014), p. 138-151 (en línea) [Fecha de consulta 16.02.2019] <https://revistas.ucm.es/index.php/UNIS/article/viewFile/44836/42246>

Sangaré, Boukary. «Le centre du Mali: épicode du djihadisme?». *Groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité (GRIP)*, (2016) (en línea) [Fecha de consulta 16.02.2019] <https://www.grip.org/fr/node/2008>

Théroux-Bénoni, Lori-Anne ; Assanvo, William ; Maïga, Ibrahim ; Abatan, Jeannine Ella ; Ba, Fatimata ; Gnonsekan, Patrick Olivier ; Kanté, Aïssatou ; Keita, Kadiatou Yacouba y Sawadogo, Wendyman Aristide. «Mali's young "jihadists" : fuelled by faith or circumstance?». *Institute for Security Studies Policy Brief*, n.º 89 (2016) (en línea) [Fecha de consulta 12.02.2019] <https://issafrica.org/research/policy-brief/malis-young-jihadists-fuelled-by-faith-or-circumstance>

Thurston, Alex. «Mali's Tragic But Persistent Status Quo». *Rosa Luxembourg Foundation* (2018) (en línea) [Fecha de consulta 01.03.2019] <https://sahelblog.wordpress.com/2018/11/12/new-report-malis-tragic-but-persistent-status-quo/>

Tobie, Aurélien. «Central Mali: Violence, local perspectives and diverging narratives». *SIPRI Insights on Peace and Security* (2017) (en línea) [Fecha de consulta 03.03.2019] <https://www.sipri.org/publications/2017/sipri-insights-peace-and-security/central-mali-violence-local-perspectives-and-diverging-narratives>

Weiss, Caleb. «Jihadist strike across West Africa». *Long War Journal* (2017) (en línea) [Fecha de consulta 01.03.2019] <https://www.longwarjournal.org/archives/2017/08/jihadists-launch-attacks-across-west-africa.php>

Wiktorowicz, Quintan. «Anatomy of the Salafi Movement». *Studies in Conflict & Terrorism*, vol. 29, n.º 3 (2006) p. 207-239.